

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD  
ADMINISTRATIVA NÚMERO: 154/2008.**

**SERVIDOR PÚBLICO:**

\*\*\*\*\*.

México, Distrito Federal, a diecisiete de noviembre de  
dos mil once.

**VISTOS;** para emitir resolución definitiva en el  
procedimiento de responsabilidad administrativa **154/2008;** y,

**R E S U L T A N D O:**

**PRIMERO. Denuncia.** Mediante oficio DGCCJEH-E-14-11-2008 de cuatro de noviembre de dos mil ocho, el Director de General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos, denunció hechos posiblemente constitutivos de responsabilidad administrativa atribuibles a \*\*\*\*\*, con el cargo de Director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chetumal, Quintana Roo, relacionados con el pago total de los servicios de encuadernación que hizo a la empresa “\*\*\*\*\*” el veintiséis de noviembre de dos mil siete, sin que dicha razón hubiera entregado la totalidad de las encuadernaciones que se le encargaron, por lo que en acuerdo de seis de noviembre de dos mil ocho se tomó conocimiento de lo informado y se inició el cuaderno de investigación número C.I. 154/2008

**SEGUNDO. Procedimiento.** Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diez, el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó iniciar a trámite el procedimiento de responsabilidad administrativa **154/2008** en contra de la persona señalada, por estimar la existencia de elementos suficientes para presumir que incurrió en la causa de responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 7 y 8, fracciones II y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con el 113 del ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 6/2001 DE LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, USOS, OBRA PÚBLICA Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES QUE REQUIERA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Se ordenó requerir al servidor público a efecto de que en el plazo de cinco días hábiles rindiera el informe relativo y exhibiera las pruebas que estimara pertinentes.

En auto de diez de diciembre de dos mil diez el Contralor tuvo por rendido en tiempo y forma el informe requerido a dicho servidor público, por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales, confesionales, presuncional legal y humana e instrumental que al efecto ofreció y, por auto de veintiséis de octubre de dos mil once, declaró cerrada la instrucción en términos del artículo 39, segundo párrafo, del ACUERDO

NÚMERO 9/2005, DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL CINCO DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RELATIVO A LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE ALTO TRIBUNAL Y DEL SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE ÉSTOS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 222 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Por diverso proveído del treinta y uno de octubre de dos mil once, se emitió el dictamen respectivo.

## **C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. Competencia.** El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver en definitiva el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXI, y 133, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en los artículos 23 y 26, segundo párrafo, del Acuerdo Plenario 9/2005, en tanto se trata de un servidor público de este Alto Tribunal al que se le atribuye una conducta infractora que no está expresamente catalogada como grave, ni se considera como tal en el caso concreto.

**SEGUNDO. Marco normativo.** Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo Plenario 9/2005, en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en él serán aplicables la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en lo que no se oponga a esta última, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En su caso, será aplicable supletoriamente el

Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, deberá acudir a los principios generales de derecho, salvo por lo que se refiere a las causas de responsabilidad y sanciones.

**TERCERO.** Análisis de la conducta atribuida al exservidor público. Del auto que dio inicio al presente procedimiento de responsabilidad administrativa, se advierte que la conducta administrativa que se atribuye al ahora exservidor de mérito es la prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 7 y 8, fracciones II y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con el 113 del Acuerdo General de Administración 6/2001, por solicitar la radicación de recursos para cubrir en su totalidad el importe de doscientas cuarenta y ocho encuadernaciones para Diarios Oficiales de la Federación, contratadas con “\*\*\*\*\*”, sin que ese trabajo hubiera sido entregado en su totalidad y **su deber era cumplir con las obligaciones que la legislación vigente en esa época establecía, así como desarrollar todas las actividades relacionadas con el puesto desempeñado apegándose a los principios que rigen el servicio público: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De las constancias que obran en autos, las que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93, fracción II,

129, 197, 202 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que:

A. \*\*\*\*\* ingresó a laborar a este Alto Tribunal con el nombramiento de ayudante de servicios de oficina de SPS adscrito a la Ponencia del Ministro Juan Díaz Romero, desde el uno de febrero de mil novecientos noventa y seis; posteriormente ocupó el cargo de Profesional Operativo en la Dirección General de Personal a partir del primero de febrero de dos mil cinco, y el de Director de Área adscrito a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chetumal, Quintana Roo, a partir del primero de febrero de dos mil siete y hasta el quince de febrero de dos mil diez (foja 104 del expediente principal); dicho exservidor tenía el deber impuesto de desarrollar todas sus actividades relacionadas con el puesto desempeñado, apegándose a los principios que rigen el servicio público: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, fracción III, y 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

B. Mediante el oficio número DGCCJEH-DA-V-128-08-2008, se solicitó a \*\*\*\*\*, justificara el pago total de la encuadernación programada en el año de dos mil siete, a la empresas \*\*\*\*\* por parte del entonces Director General Adjunto de la

Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos, de diecinueve de agosto de dos mil ocho (foja 10 del expediente principal), del cual destaca:

“(…)

*En relación con su oficio CCJCHE/509, de fecha 11 del mes en curso, por este medio solicito se sirva informar a esta Dirección General Adjunta, **los motivos por los que Usted realizó el pago total del servicio de encuadernación programada en el año 2007, a la empresa \*\*\*\*\***, sin que ésta haya entregado el total de los ejemplares solicitados.*

*Lo anterior para los efectos a que haya lugar, toda vez que se advierte de la orden de servicio que se elaboró para tal efecto, que el finiquito de pago se realizaría a la entrega del trabajo”.*

C. Con el oficio número DCJ/CHE/550 de veintisiete de agosto de dos mil ocho, donde \*\*\*\*\* da contestación al oficio no. DGCCJEH-DA-V-128-08-2008 al entonces Director General Adjunto de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos que obra en constancias (foja 11 del expediente principal), destaca:

“(…)

*En atención al oficio número DGCCJEH-DA-V-128-08-2008, de fecha 19 de agosto del presente, en virtud del cual solicita al suscrito se sirva informar a esta Dirección General Adjunta, los motivos por lo que Usted realizó el pago total del servicio de encuadernación programado en el año 2007, a la empresa \*\*\*\*\**, sin que ésta haya entregado el total de los ejemplares solicitados, me permito informar a usted lo siguiente:

- a) La responsabilidad de darle seguimiento al proceso de encuadernación de los periódicos y diarios oficiales fue delegada al licenciado \*\*\*\*\*, por ser dicho servidor público el responsable directo de dicho programa en esta Casa de la Cultura Jurídica.
- b) El \*\*\*\*\* en el mes de noviembre de 2007, me informó que por comunicación telefónica realizada con la empresa en cuestión, le había sido señalado que los materiales ya se encontraban terminados y que estaban por ser enviados, solamente que se requería que se llevara a cabo el finiquito del trabajo porque de otra manera no nos lo podían enviar.
- c) Atendiendo a la información proporcionada por la empresa se procedió a realizar el pago correspondiente.

**No omito manifestar a usted que antes de realizar el pago, no pudimos verificar que efectivamente el trabajo ya estuviera terminado toda vez que la empresa se encuentra en una ciudad distinta (Mérida, Yucatán) a la sede de esta Casa de la Cultura Jurídica, y que se confió en el dicho de la multicitada empresa ya que el año inmediato anterior se trabajó con la misma sin ningún problema** y porque las Casas de la Cultura Jurídica en Mérida y Campeche habían venido trabajando también sin ningún problema, por lo que no había elementos para desconfiar de su dicho en el sentido de que ya tenían los materiales terminados.

También me parece importante mencionar a usted, que el pago se realizó a finales del mes de noviembre de 2007, es decir, en los días últimos para poder realizar la comprobación correspondiente por los recursos utilizados en dicha encuadernación. De esta manera el problema era que si no se realizaba el depósito a la empresa y se regresaban los recursos al Máximo Tribunal, ante el inminente cierre del ejercicio fiscal, la empresa no nos iba a enviar los materiales, sino hasta que se hubieran vuelto a solicitar los recursos, lo que calculamos que ocurriría en el mes de marzo del 2008. Pero, sobre todo, aunque no teníamos los materiales físicamente, teníamos el dicho de la empresa de que ya se había terminado el trabajo y, como ya se

*mencionó, no había elemento alguno de convicción que nos hiciera dudar de la veracidad con la que se conducía la referida empresa, máxime que, como vuelvo a insistir las Casas de la Cultura en Mérida y Campeche tampoco habían tenido problemas de retraso ni de incumplimiento en la entrega de los materiales con “\*\*\*\*\*”.*

D. \*\*\*\*\* presentó su informe el treinta de noviembre de dos mil diez, el que obra en constancias (fojas 463 a la 489 del expediente principal), del cual destaca:

Que \*\*\*\*\* reconoce que con el oficio CCJ/CHE/777 envió la factura “5011”, emitida por “\*\*\*\*\*” a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad para su comprobación, en virtud de que, según expuso en dicho oficio, al veintiséis de noviembre de dos mil siete, el prestador de servicio había entregado el total de los trabajos contratados relativos a la encuadernación de 248 (doscientos cuarenta y ocho) tomos de Diarios Oficiales de la Federación, **lo que constituye una confesión expresa de los hechos infractores materia de este procedimiento.**

Adujo que debido a que las oficinas de la prestadora de servicios se encontraban en Mérida, Yucatán, era difícil realizar la supervisión del avance en los trabajos de encuadernación, por lo que pidió a la titular de la Casa de la Cultura Jurídica en esa ciudad hiciera llegar a la empresa antes mencionada el oficio CCJ/CHE/094 de doce de febrero de dos mil ocho, en el que solicitaba se fijara una fecha para la entrega de los encuadernados, pero que el oficio en mención fue entregado hasta el veinticinco de marzo de ese año.



Al respecto, debe decirse que con tal alegato sólo se corroboran los hechos por los que se siguió procedimiento a \*\*\*\*\*, esto es, que realizó el pago total anticipado a la prestadora de servicios “\*\*\*\*\*”, sin que hubiera recibido en su totalidad las doscientas cincuenta encuadernaciones contratadas por su persona, como titular de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chetumal, Quintana Roo, y que a partir del doce de febrero de dos mil ocho, estuvo realizando diligencias para que le fueran entregados los trabajos de encuadernación de diarios y periódicos oficiales, empero, esa afirmación no le justifica la comisión de la infracción administrativa que se le atribuye.

Por otro lado \*\*\*\*\* hizo valer como alegato que \*\*\*\*\* como responsable del área de compilación de leyes de la Casa de la Cultura Jurídica en comento, fue quien directa, concreta y específicamente realizó todo el procedimiento relativo a la encuadernación de los Diarios Oficiales de la Federación, por lo que imputa en forma directa a dicho servidor público que en el mes de noviembre de dos mil siete, él fue quien le informó que la empresa “\*\*\*\*\*” ya había enviado las encuadernaciones y, por consiguiente, **“autorizó a que el mismo servidor público realizara el depósito del finiquito”** (foja 424) y para ello ofreció la confesional a cargo de \*\*\*\*\*, la cual se desahogó mediante exhorto en términos de los artículos 119 y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tenor de cuatro preguntas de la que destaca la número cuatro, que es del siguiente tenor :

*“CUARTA.- QUE USTED INFORMÓ AL TITULAR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CHETUMAL QUINTANA ROO, MAESTRO \*\*\*\*\* , QUE EL TRABAJO DE ENCUADERNACIÓN CONTRATADO CON LA EMPRESA \*\*\*\*\* RELACIONADO CON LA FACTURA 5011, HABÍA SIDO YA ENVIADO POR LA EMPRESA RESPONSABLE Y YA ESTABA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.”*  
*\*\*\*\*\* respondió (foja 36, vuelta del cuaderno de pruebas 2): “Que no.”*

En conclusión, se destaca que \*\*\*\*\* reconoce la comisión de los hechos por los que se siguió procedimiento de responsabilidad en su contra; conviene reiterar que \*\*\*\*\* en el desahogo de la prueba confesional a su cargo, refirió que él no le informó a \*\*\*\*\* que el trabajo de encuadernación contratado con la referida empresa hubiera ya había sido enviado y que se encontraba físicamente en esa sede, por lo que, contrario a lo afirmado por el probable responsable, se encuentra acreditado en autos que él solicitó y realizó el pago total por concepto de doscientas cuarenta y ocho encuadernaciones de Diarios Oficiales de la Federación, sin que el trabajo hubiera sido entregado en su totalidad, lo cual, como se dijo, se encuentra expresamente aceptado por él.

Por tanto, al no existir dentro de las constancias que integran el expediente, algún elemento que permita eximir de responsabilidad a \*\*\*\*\* por realizar el pago total de doscientas cuarenta y ocho encuadernaciones de Diarios Oficiales de la Federación bajo resguardo de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chetumal, Quintana Roo, en noviembre de dos mil siete, sin que

el trabajo hubiera sido entregado por parte de la prestadora de servicios en su totalidad, es dable concluir que el referido exservidor público se ubica en la causa de responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir con la obligación contenida en el artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos<sup>1</sup>, por tanto lo que procede es determinar la sanción correspondiente.

Las manifestaciones que a manera de confesión expresa relata el servidor público, no desvirtúan la infracción de que se trata ni representan justificación alguna, y procede concluir que es responsable de aquélla.

En tal orden, existen elementos suficientes para tener por acreditado que el servidor público incumplió con el deber impuesto de desarrollar todas sus actividades relacionadas con el puesto desempeñado, apegándose a los principios que rigen el servicio público: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, fracción III y 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 7 y 8, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

**CUARTO. Sanción.** Al quedar demostrada la infracción administrativa atribuida a \*\*\*\*\*, se procede a individualizar

---

<sup>1</sup> **ARTICULO 8.-** *Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:*  
**II.-** *Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos;*

la sanción que le corresponde conforme a lo dispuesto en los artículos 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con el artículo 46 del Acuerdo Plenario 9/2005, en los siguientes términos:

**a) Gravedad de la sanción.** La conducta atribuida al infractor no está tipificada como grave, toda vez que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ni en el antepenúltimo párrafo del artículo 13, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y en el caso concreto tampoco se considera así.

**A. Nivel jerárquico y antigüedad en el servicio.** De las copias fotostáticas certificadas del expediente personal del infractor que obran en autos, se advierte que ingresó a laborar en este Alto Tribunal con el nombramiento de ayudante de servicios de oficina de SPS, adscrito a la Ponencia del Ministro Juan Díaz Romero, desde el uno de febrero de mil novecientos noventa y seis; posteriormente ocupó el cargo de Profesional Operativo en la Dirección General de Personal a partir del primero de febrero de dos mil cinco; y, en la en la época en que sucedieron los hechos, tenía nombramiento definitivo como Director de Área adscrito a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chetumal, Quintana Roo, a partir del primero de febrero de dos

mil siete (foja 179), como se acredita con la copia certificada, al igual que a cualquier servidor público del Alto Tribunal, era exigible que su actuar se apegara entre otras a las obligaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

**b) Condiciones exteriores y los medios de ejecución.** De las constancias del expediente, se advierte que el infractor omitió desarrollar actividades relacionadas con el puesto desempeñado, apartándose de los principios que rigen el servicio público: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, al autorizar el pago por su servicio sin que éste se hubiese recibido en su totalidad.

**c) Reincidencia.** Del registro de servidores públicos sancionados no se advierte que \*\*\*\*\*, lo haya sido previamente.

**d) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.** En la especie no existe prueba de que el servidor público hubiese obtenido algún beneficio o lucro indebido, o hubiera ocasionado daño o perjuicio económico a este Alto Tribunal con motivo de la infracción en que incurrió.

En mérito de las consideraciones que anteceden y atendiendo a la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan el deber que se impone a los servidores públicos de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cumplir con el deber de desarrollar todas las actividades relacionadas con el puesto desempeñado apegándose a los principios que rigen el servicio público: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia , así como a la conducta procesal observada por el infractor durante el desarrollo de este procedimiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXI, 133, fracción II, 135, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 45, fracción II, y 46 del Acuerdo Plenario 9/2005, esta Presidencia estima que se debe imponer al infractor la sanción de **Amonestación Privada**, que se ejecutará por el Contralor de este Alto Tribunal en términos de lo establecido en el citado Acuerdo.

Asimismo, deberá remitirse copia certificada de la presente resolución a la Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que sea agregada al expediente personal de

\*\*\*\*\*.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

**PRIMERO.** \*\*\*\*\* incurrió en la falta administrativa materia del presente procedimiento.

**SEGUNDO.** Se impone a \*\*\*\*\* la sanción de **Amonestación Privada**.

Devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente resolución y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió el Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa con el Doctor Fernando Altamirano Jiménez, Contralor de este Alto Tribunal que da fe.

Esta hoja corresponde al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 154/2008, instaurado en contra de \*\*\*\*\* Conste.

MATL/JGCR/JHT

***“En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracción II, 13,14 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.***